

Servicio Integrado de Información Arrocería (03 de agosto 10)

Diario Extra

- **Gobierno busca meter mano en regulación del precio
ARROZ COMPLICA CUOTAS DE SUBSIDIOS DEL PAÍS ANTE OMC**

Costa Rica se expone a sanciones comerciales por ello.

MARCELINO RIVERA SALAZAR

mrivera@diarioextra.com

El valor de los subsidios reconocidos por Costa Rica para la producción de arroz está muy por encima del límite permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC), ante lo cual se expone a castigos económicos o arancelarios por parte de países con los que mantiene intercambio comercial.

Así lo deja ver una carta enviada por el entonces ministro de Comercio, Marco Vinicio Ruiz, a las jerarcas designadas de Comercio Exterior, Anabel González; de Economía, Mayi Antillón; de Agricultura, Gloria Abraham; y al vicepresidente Luis Liberman, a pocos días de dejar su cargo en el anterior gobierno.



El principal programa de ayuda interna distorsionante en el país es el sostenimiento en el precio del arroz.

Precisamente en esta misiva es donde expone la necesidad de que se revise el precio administrado del grano para “que su aplicación en ningún caso haga que se exceda ese límite”, indica la carta, que además pide la revisión del decreto 35189 “para asegurar que no se excederá ese límite en el futuro”. La carta en poder de DIARIO EXTRA indica que el principal programa de ayuda interna distorsionante en el país es el sostenimiento en el precio del arroz; es decir, que el gobierno si bien no da apoyo económico a los arroceros, supuestamente logra para ellos un ingreso competitivo. Ese sostenimiento se logra con la fijación del precio de compra del industrial al productor en el Decreto Ejecutivo No.24517 sobre el Modelo de Costos de Producción Agrícola del Arroz. Con el objetivo de verificar que el país respete el límite, cada año calcula el monto con la Medida Global de Ayuda Total Corriente (MGA Total Corriente).

CORPORACION ARROCERA NACIONAL

CONARROZ

San José, Costa Rica

Desde 2007 se sobrepasa la suma de \$15 millones 945 mil permitida por la OMC como subsidio agrícola para los países en desarrollo, lista en la que está Costa Rica.

“En el 2007 la MGA Total Corriente fue de \$23 millones 290 mil 582, es decir, se excedió en un 46%. En el 2008 fue de \$62,5 millones (se pasó en un 291%) y la del 2009 fue de \$91,7 millones (475% más). Para 2010 las estimaciones realizadas hasta ahora prevén que los subsidios otorgados por Costa Rica al arroz alcanzarán los \$125 millones”, subrayó Ruiz.

RIESGO

En su misiva resaltó que “otorgar subsidios que superen el nivel máximo es una grave violación de obligaciones del país en la OMC”. En 2006 el excedente fue de \$1,5 millones y en ese momento la OMC cuestionó severamente al gobierno de turno. Además, de acuerdo con la comunicación, en octubre pasado Canadá, Australia y Estados Unidos pidieron explicaciones a Costa Rica sobre las razones de esta violación.

“Nuestro país está a las puertas de una grave disputa comercial en la OMC con todas las posibilidades de perderla y sufrir serias sanciones comerciales de parte de otros miembros de esa organización”, advirtió Ruiz. Bajo los acuerdos de la OMC, la mayoría de los miembros coincide en limitar cuánto pagan a los agricultores para alentarlos a cultivar alimentos y cuánto apoyan las exportaciones. La idea de esto es evitar distorsiones al comercio mundial. Un tipo de sanción podría ser, por ejemplo, elevar aranceles a las importaciones.

ENTERADOS

Mayi Antillón, ministra de Economía, reconoció a DIARIO EXTRA que existe esa presión. “Ya estamos haciendo las evaluaciones, tanto en el Ministerio de Economía como en Agricultura y en Comercio, para lograr lo más importante, aumentar la producción sin violar nuestros compromisos internacionales. Estamos analizando cuáles son esos límites”, declaró.

“NO RECIBIMOS NADA”

Consultado sobre la polémica, Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, dijo que el sector arrocero no recibe ningún subsidio económico por parte del gobierno.

“Eso es mentira, no recibimos nada, al menos nada que se interprete como subsidio. Eso es un problema de gobierno que no nos puede afectar a los productores. Lo que hacen es sacar la diferencia entre \$223 y el precio fijado al consumidor, que según el

gobierno se convierte en un subsidio estatal. Pero eso no es cierto, aquí el gobierno fija un precio de acuerdo a los costos de producción”, concluyó.

SEPA QUE...

Para calcular el subsidio se compara el precio promedio fijado cada año para cada tonelada métrica (tm) de arroz con un precio exterior de referencia (\$223,78 por tonelada), definido para todos los países en la Ronda de Uruguay de la OMC. La diferencia entre ambos se multiplica por la producción (en tm).

La Nación

ACTUAL GOBIERNO FRENÓ REESTRUCTURACIÓN

Ajuste en Servicio Fitosanitario creaba 160 puestos de jefatura

Proliferación de puestos elevaba gasto en ¢500 millones anuales

Ministra del MAG, Gloria Abraham, defiende cambios, pero ataca la forma

CALIFICACIÓN:

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 09:01 P.M. 02/08/2010

La reestructuración del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), puesta en marcha a finales del Gobierno anterior, creaba 160 jefaturas, por lo que las nuevas autoridades frenaron su aplicación.

Con los cambios iniciales, la institución debía añadir una erogación de ¢500 millones anuales.

Así lo denunció la actual ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, al ser cuestionada acerca del tema.

La reestructuración se había consultado y consensuado con los sectores privados. Surgió luego de que se cuestionaron metodologías y controles en el SFE.

También fue el resultado de una intervención en el Servicio por parte del Gobierno anterior.

“Un proceso que pudo ser excelente se echó a perder al final”, enfatizó la ministra Abraham.

El Gobierno actual emitió otro decreto para frenar el proceso. El fin es analizar con cuidado las propuestas de cambio y aplicarlas con otro procedimiento, detalló la funcionaria.

Agregó que la suspensión del plan fue conocida y avalada por la Comisión Nacional Asesora del Ministro y del Servicio Fitosanitario del Estado (Conafi).

En esa comisión hay representantes de cámaras, de las universidades y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.

También se informó con detalle a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) del porqué del freno a los ajustes en el SFE, enfatizó Abraham.

De acuerdo con la Ministra, las dos instancias de representación del sector privado reconocieron la necesidad de frenar los cambios y buscar otra manera de hacerlos.

Buena intención. Abraham reconoció que un mes antes de entrar al Gobierno, el pasado 8 de mayo, conocía y le parecieron adecuados los cambios que impulsaba la reestructuración del SFE.

El plan se echó a andar en aquel entonces mediante un decreto, unos 63 días antes de la entrada del nuevo Gobierno. El documento establecía que debía estar en vigencia 60 días después; esto es, dos días antes de salir el Gobierno anterior.

Parte de los 160 puestos de jefatura se nombraron a dos días de entrar la Administración actual.

De esos 160 puestos, un total de 80 implicaba abrir plazas nuevas.

La administración del Servicio tramitó el permiso ante la Contraloría General de la República para contratar al nuevo personal, pero no lo hizo ni ante la Autoridad Presupuestaria ni ante el Servicio Civil. Esto impedía invertir en los salarios aunque hubiera recursos, encontró un estudio realizado por el Gobierno actual.

Aun así, la ministra Abraham respaldó los cambios propuestos para mejorar la inspección en puertos y fronteras y para descentralizar el SFE y llevarlo a las regiones.

CORPORACION ARROCERA NACIONAL

CONARROZ

San José, Costa Rica

Origen. El 12 de junio del 2008, el entonces ministro del MAG, Javier Flores, ordenó la intervención del SFE, en vista de cuestionamientos acerca de los reglamentos y su forma de aplicación, especialmente en cuanto a registros de productos.

Además, el ministro de entonces denunció “una mala gestión administrativa”, que incluso impedía inversiones y cumplir con las metas presupuestarias.

En aquel momento se dijo que el SFE tenía guardados ¢8.000 millones sin que los pudiera utilizar.

Esa entidad se financia con recursos propios, pues cobra tarifas por muchos de los servicios que presta, entre ellos los obligatorios exámenes de laboratorio para la importación de productos vegetales. También cobra un porcentaje por la importación al país de plaguicidas y fertilizantes.

Este servicio se encarga del registro oficial de agroquímicos y productos biológicos, aplica la ley de exoneraciones a materias primas para el agro y otorga los permisos de importación para todos los alimentos que ingresen al país.

Además, certifica la sanidad de bienes de exportación cuando los países de destino lo exigen, realiza una vigilancia preventiva contra plagas y enfermedades de cultivos (tanto en aduanas y fronteras como en campos de cultivo) y se encarga del control cuando los males estén presentes aquí.

También mantiene y opera los laboratorios oficiales del país.